



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)
Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Políticas públicas y decisiones judiciales: Estudio del caso de reciclaje en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá)

María Fernanda Gómez Pineda¹

Universidad Católica de Colombia

Resumen

El objetivo principal de este artículo es identificar y analizar si las políticas públicas en materia de reconocimiento social y jurídico para la protección de los derechos de los recicladores implementadas por el Estado Colombiano y en especial en el Municipio de Chiquinquirá (Boyacá) han sido suficientes para garantizar la inclusión de los recicladores en la prestación del servicio público de aseo.

Todo lo anterior en cuanto la Corte Constitucional reitera en las sentencias T-724 de 2003 y T-291 de 2009 que los recicladores son una población socialmente excluida o marginada debido a sus condiciones de vida y educación y que se deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos constitucionales como al trabajo, a la igualdad y a la dignidad humana.

Además, se podrán observar las acciones afirmativas o positivas, propuestas por la administración pública como aquellas medidas orientadas a favorecer y posicionar a la población recicladora del Municipio con el propósito de remediar situaciones de desventaja o exclusión; ¿cuáles de ellas se han desarrollado como acciones reales y cuales se han omitido o incumplido?

Palabras Clave: Colombia, Chiquinquirá, Recicladores, Inclusión, Derechos Fundamentales, Derechos Humanos y Servicio Público de Aseo.

¹ Artículo de Investigación elaborado como requisito de Trabajo de Grado para optar por el Título de Abogada de la Universidad Católica de Colombia, Correo Institucional: mfgomez04@ucatolica.edu.co, bajo la Dirección del Doctor Cesar Augusto Castillo Dussan docente de la Universidad Católica de Colombia, 2019.

Abstract

The main objective of this article is to identify and analyze whether public policies regarding social and legal recognition for the protection of the rights of waste pickers implemented by the Colombian State and especially in the Municipality of Chiquinquirá (Boyacá) have been sufficient to guarantee the inclusion of recyclers in the provision of the public toilet service.

All of the above as the Constitutional Court reiterates in sentences T-724 of 2003 and T-291 of 2009 that waste pickers are a socially excluded or marginalized population due to their living and education conditions and that the necessary measures must be taken to ensure the effective enjoyment of constitutional rights such as work, equality and human dignity.

In addition, affirmative or positive actions proposed by the public administration may be observed as those measures aimed at favoring and positioning the recycling population of the Municipality in order to remedy situations of disadvantage or exclusion; Which of them have been developed as real actions and which have been omitted or breached?

Keywords: Colombia, Chiquinquirá, Recyclers, Inclusion, Fundamental Rights, Human Rights and Public Toilet Service.

Sumario

INTRODUCCIÓN, 1. Antecedentes y situación actual , 2. Salubridad Publica en el Municipio de Chiquinquirá (Boyacá), 3. Situación socio-económica, empresarial y competitiva de las poblaciones más vulnerables del municipio de Chiquinquirá, 4. Responsabilidad de los entes territoriales en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 5. Derechos Humanos a considerar. Conclusiones y recomendaciones. Referencias bibliograficas.

Introducción

La Corte Constitucional colombiana, en los últimos años ha sido protagonista de la lucha social y jurídica de los recuperadores de residuos sólidos o recicladores de oficio; de los diferentes conflictos y obstáculos que esta población ha tenido para lograr su formalización. A partir del año 2003 la Corte Constitucional por medio de la sentencia T- 724 reconoció la necesidad de que las entidades encargadas de la efectiva prestación de servicios públicos **desarrollen** acciones afirmativas para que a esta población se le garantice el derecho al trabajo, labor que vienen **desempeñando** por años, además del derecho a la Igualdad.

(...) El problema social vinculado a los recicladores ha adquirido alcances preocupantes al manifestar la intolerancia, el maltrato social y la violación de derechos, incluso por el mismo Estado, a un grupo humano cuya especial vulnerabilidad los debería colocar en primer orden de atención por parte de las políticas de inclusión social. Las personas que se dedican a esta labor, por lo general, pertenecen a grupos socioeconómicos muy desfavorecidos que sitúan sus ingresos por debajo del salario mínimo, y se ubican entre el 10% más pobre de la población. (Cano, 2017, p.3)

A nivel mundial existen políticas públicas con el fin de promover el reciclaje,

Actualmente, en América Latina se ha reconocido la importancia de la inclusión social y de implementar políticas que ayuden a su promoción. Basada en la experiencia europea, la CEPAL trabaja en una serie de indicadores que logren responder a las particulares condiciones de la región (Fraser, 2010, p. 26).

En el caso de Colombia donde este trabajo es realizado por personas de escasos recursos económicos, baja formación académica, que trabajan en condiciones degradantes y donde sus derechos son vulnerados, la jurisprudencia ha sido considerada progresista promoviendo y construyendo modelos institucionales de inclusión social y productiva, ya que generando trabajo, aprovechando sus capacidades y conocimientos contribuyen con la calidad de vida de la población de los diferentes Municipios del país; fundando reivindicaciones sociales por la igualdad y la justicia social.

Otro logro alcanzado por los recicladores, fue el Decreto 596 del 2011 el cual modifica el Decreto 1077 de 2015 que ordena a la UAESP definir un plan concreto con metas claras para lograr la inclusión de la población recicladora en su artículo 2.3.2.5.1 indica que los entes territoriales incluirán en el "programa de inclusión de recicladores" del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. (PGIRS, 2018)

El presente tema, se enmarca en el ámbito socio-jurídico de la situación de los recicladores, partiendo de que no es posible un conocimiento absoluto de los intereses y conflictos de los actores involucrados, ni es posible abarcar la totalidad de los actores, es por ello que este estudio se centró en la población de la Ciudad de Chiquinquirá (Boyacá).

Frente a lo dispuesto en las sentencias T-724/03; T-291/09 y C-793/09 de la Corte Constitucional la administración pública de Chiquinquirá ha diseñado proyectos o actividades con fines de satisfacer las necesidades de la población recicladora los cuales están plasmadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS². A dichos proyectos les ha faltado concretar acciones reales que les permita mejorar las condiciones de vida y proteger sus derechos como al trabajo por medio de la vinculación a las entidades que prestan el servicio público de aseo; a la igualdad y a la dignidad humana.

Es importante resaltar que dichos proyectos además de ayudar a la inclusión social de la población recicladora, beneficiarían a toda la comunidad ya que también están encaminados a resolver el problema de Salubridad Pública por la gran cantidad de desechos orgánicos producidos en el centro de acopio del municipio de Chiquinquirá lo que genera acidez en los suelos de nuestra región.

Para realizar esta investigación se recolectó información de algunos repositorios de Universidades Colombianas, como la Universidad Nacional, Universidad Sergio Arboleda, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Minuto de Dios, Universidad de los Andes y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; además de sentencias, decretos y un estudio realizado por la Alcaldía de Chiquinquirá e información que reposa en los archivos de la

² Decreto 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (que contiene el Decreto 2981 de 2013). El cual reglamenta la actividad de aprovechamiento de materiales reciclables el cual indica que los entes territoriales deben incluir un "programa de inclusión de recicladores".

Corporación de Desarrollo³ del Municipio que permitieron determinar los actores involucrados, reconocer sus intereses y necesidades.

A partir de la recolección, análisis e identificación de la problemática del reciclaje, actores involucrados y necesidades; Se presentó el trabajo partiendo de los Antecedentes y situación actual; Salubridad Publica en el Municipio de Chiquinquirá (Boyacá); Situación socio-económica, empresarial y competitiva de las poblaciones más vulnerables del municipio de Chiquinquirá; Responsabilidad de los entes territoriales en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) tomando como ejemplo comparativo ciudades como Bucaramanga, Medellín y Chiquinquirá; Derechos Humanos a considerar y por último, se hará una conclusión.

1. Antecedentes y situación actual.

El primero de marzo se conmemora el día del Reciclador debido a la tragedia ocurrida en 1992 en la Universidad Libre de Barranquilla cuando fueron asesinados 11 trabajadores dedicados al reciclaje. Posteriormente, en el Encuentro Internacional de Recicladores que reunió a 34 países en Colombia el año 2008 se oficializo el Día Mundial del Reciclador (Ley 511 de 1999). Los recicladores son aquellas personas que

(...) Se han afiliado a la organizaciones y que proveen o venden el material a la misma, estos al momento que realizan la comercialización de los materiales deben realizar el diligenciamiento de la planilla, la cual tiene por objetivo reportar los kilos por reciclador con el fin de recibir el pago de reconocimiento por la labor realizada, este valor es autónomo por cada una de las organizaciones de reciclaje. (Castellanos, 2013, p. 39)

En América Latina esta tarea es realizada por gran parte de su población, esto se debe a las pocas oportunidades laborales que tiene cada país, un ejemplo de ello lo vemos en Paraguay que es uno de los países con mayor índice de pobreza y desigualdad de América Latina, (Lavalleja y

³ Instituto cuyo fin es propender por el desarrollo industrial, social, económico, político y cultural de la comunidad Chiquinquirá elevando la calidad y el nivel de vida. Su trabajo y gestión está encauzada en lograr las metas y objetivos del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS – del Municipio de Chiquinquirá adoptado mediante decreto 051 del 3 de Diciembre de 2015 dando cumplimiento a la Resolución 0754 del 25 de Noviembre del 2014.

Rosselot, 2018, p. 5) se estima que el 40% de su población se dedica a la labor del reciclaje de residuos sólidos con el resultado de que no se desperdicien materiales que pueden ser reutilizados, de acuerdo a lo anterior no solo es reconocer que esta labor es importante si no hay un marco normativo que regule este oficio y garantice los derechos de las personas que lo ejercen.

Mientras que en Colombia vemos un avance en materia de reconocimiento social y jurídico para la protección de los derechos de los recicladores, en la sentencia T-724 de 2003, la Corte Constitucional estudió el siguiente caso:

(...) El Gerente de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos de Bogotá (UESP) ordeno la apertura de la licitación pública No. 01 de 2002, un proceso de selección para adjudicar, mediante contrato de concesión, la prestación del servicio público de aseo en la capital, cumpliendo los requisitos habilitantes de experiencia, capital, conocimiento y manejo de tiempo. En dicha licitación se estableció que sólo podrían participar los operadores que habían ofrecido este servicio en la ciudad desde mil novecientos noventa y cuatro (1994). La corte eligió este caso para revisión y afirmó que la UESP transgredió los derechos fundamentales de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), dado que la Licitación Pública No. 01 de 2002 no incluyó medidas afirmativas idóneas a favor de la población consagrada al reciclaje, teniendo en cuenta que se trata de un grupo marginado. Al contrario, consideró que la actuación de la UESP profundizaba la situación de marginación de estas personas por dos razones: 1) La única medida afirmativa contenida en el pliego de condiciones establecía que el 15% de los operarios requeridos para el corte de césped deberían ser personas en situación de desplazamiento y recicladores, no obstante, esta medida resultaba ineficaz dado que se trataba de una actividad diferente a la de reciclaje, y el 15% a contratar incluyó a otras personas en condición de debilidad manifiesta, como lo es la población víctima del desplazamiento. 2) La política de la UESP de dejar en manos de los concesionarios la actividad de recuperación de materiales sólidos reutilizables y excluir a los recicladores de la misma, acentuaba las condiciones de marginación y exclusión social de esta población. (Castellanos, 2013, p.244)

De acuerdo a lo anterior para el Doctor Jaime Araujo Renteria, Magistrado Ponente de la Corte constitucional, señala la importancia de que exista un sistema de inclusión para los recicladores en la prestación del servicio público de aseo además de que siendo este un Estado

Social del Derecho se sobrepase la barrera discriminatoria a la población recicladora. (Sentencia T-724, 2003)

Dicha inclusión de los recicladores no sólo debe darse como empleados temporales o permanentes sino como empresarios de las basuras, favoreciendo formas asociativas con el fin de que estos grupos poblacionales gestionen conjuntamente sus derechos.

Se logra un segundo avance jurídico por medio de la sentencia de Constitucionalidad C-793 de 2009 a favor de los recicladores, dicha sentencia resuelve la demanda de inconstitucionalidad presentada por la ANR contra la ley 1259 de 2008 que instaura el comparendo ambiental en Colombia. La ANR considera que los numerales 6, 14 y 15 del artículo 6º, que permite a la administración a imponer multas a quienes saquen los residuos de los contenedores de almacenamiento, impide el desarrollo del trabajo de los recicladores y genera un monopolio sobre el aprovechamiento de la basura a favor de las empresas de aseo, únicas autorizadas para vaciar los contenedores. La Corte determina la exequibilidad condicionada de lo demandado “en el entendido de que el comparendo ambiental no podrá impedir el ejercicio efectivo de la actividad de los recicladores informales” (Sentencia C-793, 2009)

En el mismo año la Corte Constitucional Colombiana estudio y emitió la sentencia T-291 del cierre del basurero de Navarro de la ciudad de Cali, a partir de varias sentencias de tutelas acumuladas al respecto. Los ciudadanos que interpusieron la acción de tutela fueron 30 recicladores que derivaban su sustento de dicho basurero y si bien dos semanas antes del cierre suscribieron un acta en la que las autoridades locales se comprometían a ofrecerles oportunidades de empleo, capacitación, salud y educación, esto no fue cumplido. En dicha sentencia la Corte reitera que los recicladores son una población socialmente excluida o marginada debido a sus condiciones de vida y educación.

El cierre del basurero de Navarro garantizaba la salubridad pública puesto evitaba la contaminación del medio ambiente y los efectos que generan a la población “no había nada que hacer para permitir su operación en condiciones ambientalmente óptimas” (Sentencia T-291, 2009).

Pero también afectaba a cientos de familias que sacaban su sustento diario del reciclaje y el Municipio de Cali no previó una medida que asegurara el bienestar de estas familias. El Estado teniendo una posición de garante frente a esta población omitió su protección en el momento del cierre del botadero.

Dicho lo anterior la Corte ordena que, dentro de los dos meses siguientes, se adoptaran las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos constitucionales a la salud, a la educación, a la vivienda digna y a la alimentación, verificando en cada caso la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, el acceso a la educación para menores de edad, y su inclusión en los programas sociales de la Alcaldía en asuntos de alimentación y vivienda. Concluye, la Dra. Clara Helena Reales Gutiérrez Magistrada Ponente de la Corte Constitucional para garantizar la inclusión de los recicladores del basurero y los de la Ciudad de Cali (Sentencia T-291, 2009).

Algo semejante ocurre en la ciudad de Chiquinquirá (Boyacá) dentro de los programas del Plan de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS) adoptado mediante decreto 051 del 3 de Diciembre de 2015, está la inclusión de la población recicladora del municipio y su posicionamiento como empresario de la actividad de aprovechamiento todo esto a la luz de la sentencia T-291 de 2009, donde se busca incentivarlos a su asociación y que como empresarios logren un reconocimiento de la sociedad y el estado.

La principal función de la Corte Constitucional es la de velar por la supremacía e integridad de la Constitución, y por ello a través de las sentencias, ha amparado los derechos fundamentales de las personas más vulnerables en el país. Aunque lo anterior se encuentra plasmado en el PGIRS, la realidad es totalmente diferente, los recicladores viven en el marginamiento de la ciudad, sin reconocérseles el servicio fundamental que le brindan a diario a la comunidad con la esperanza de que algún día las falsas acciones afirmativas puedan llegar a materializar sus derechos a la igualdad, al trabajo, a un mínimo vital que les garantice el respeto a la dignidad humana, al debido proceso y al principio de legalidad.

2. Salubridad Publica en el Municipio de Chiquinquirá (Boyacá)

Uno de los grandes problemas ambientales en el Municipio de Chiquinquirá (Boyacá) lo ha generado en centro de acopio y mercadeo por la cantidad de desechos orgánicos que se producen en este lugar, se estima que diariamente son 2.5 toneladas que son llevadas al relleno sanitario ubicado en la Vereda Carapacho propiedad del Municipio de Chiquinquirá y administrado por EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P sin un óptimo manejo; además de la falta de educación ambiental por parte de la comunidad.

(...) La educación ambiental permite la construcción de estrategias pedagógicas para enseñar a la comunidad a cuidar, valorar y conservar el territorio, de modo que mejore su calidad de vida, a través del saber ambiental inserto en las prácticas culturales, manifestadas en el actuar cotidiano de las personas. (Figuerola y García 2019, p. 10)

Esta problemática de contaminación por residuos sólidos, la ausencia de manejo y el mal funcionamiento del relleno sanitario el cual se convirtió en un botadero a cielo abierto generando la contaminación de las fuentes hídricas, del aire (basura arrastrada por el viento) y del suelo lo que ha sido un problema de salubridad para el Municipio de Chiquinquirá, incluso para Saboya, Ráquira y otros municipios cercanos, puesto que no hay un sistema de aseo eficaz para estos municipios los cuales destinan sus residuos sólidos a este relleno y por lo tanto la comunidad podría estar expuesta a un grave problema sanitario, lo que llevó a la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) regional Chiquinquirá, a cerrar el relleno sanitario en el año 2013 el cual provisionalmente reabrió unos meses después. (Corporación Autónoma regional de Cundinamarca, 2013)

En Colombia, el manejo de los “residuos sólidos se ha efectuado en función de la prestación del Servicio público de aseo, en donde las consideraciones de tipo sanitario han prevalecido sobre aquellas de índole ambiental” (Rodríguez y Vergara, 2015, p. 9)

El gas metano y dióxido de carbono son producidos por la descomposición de los residuos orgánicos no solo afecta la salud por su penetrante olor, acaba con la vegetación y provoca el calentamiento global al ser un gas de efecto invernadero. Un estudio realizado como trabajo de grado de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC) situada en la ciudad de Chiquinquirá tiene como objetivo “procurar procesar los residuos orgánicos, materia prima recuperada por reciclaje, para crear posteriormente productos de uso agroindustrial a través de la implementación de un proceso de descomposición biológica generada por larvas de escarabajos”. (López, Pérez, y Roncancio, 2018, p. 21). Dicho estudio de factibilidad contribuiría a la problemática ambiental del Municipio por la incorrecta cultura del reciclaje.

Otro estudio de la misma Universidad propone la creación de una Planta Productora de Compost orgánico con los residuos y probióticos en la ciudad de Chiquinquirá, siendo esto una posibilidad de salida económicamente viable a un problema de tipo ambiental y social, en la ciudad.

En el evento de implementar cualquiera de los dos estudios anteriores se podría resolver dos realidades que son un problema para la ciudad de Chiquinquirá, uno la gran cantidad de desechos orgánicos producidos en el centro de acopio del municipio de Chiquinquirá y dos, al crear una planta productora de Compost orgánico generaría empleo a todos lo recicladores de oficio quien con su experiencia le darán un óptimo manejo a la planta.

3. Situación socio-económica, empresarial y competitiva de las poblaciones más vulnerables del municipio de Chiquinquirá.

Este estudio es de tipo descriptivo, realizado por la Corporación de Desarrollo de Chiquinquirá eh intenta plasmar la situación socioeconómica, empresarial y competitiva de los recicladores como población vulnerable del municipio de Chiquinquirá. Para ello, centrará su estudio en los grupos poblacionales de recicladores, que se encuentran ubicados en los diferentes barrios de Chiquinquirá.

La primera, se refiere a las Necesidades Básicas insatisfechas, y maneja variables como: vivienda inadecuada, nivel de hacinamiento, servicios inadecuados, inasistencia escolar y alta dependencia económica. La segunda dimensión comprende nivel de ingresos y gastos en el hogar, esta dimensión tiene en cuenta variables como: número de hogares por vivienda, tipo de ocupación de la vivienda, tamaño de la unidad de gasto, ingreso *per cápita*, nivel y estructura del gasto. Por último, analiza la dimensión competencias laborales y formación para el trabajo a partir de las siguientes variables; nivel de ocupación, informalidad laboral, actividad a la que se dedica, experiencia laboral, forma en la que adquirió habilidades para el trabajo, nivel de escolaridad y capacitación para el trabajo.

Al final, las conclusiones ofrecen elementos objetivos para afirmar que la población de recuperadores objeto de estudio presenta notables condiciones de vulnerabilidad económica que afectan su calidad de vida.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

La determinación de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), permite identificar condiciones básicas como: condiciones de vivienda inadecuadas, hacinamiento crítico, servicios inadecuados, alta dependencia económica y hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. La vivienda inadecuada implica al menos una de las siguientes condiciones: vivienda móvil, vivienda ubicada en refugios naturales o puentes, sin paredes o paredes en material de desecho, o pisos en tierra; un hogar presenta hacinamiento crítico cuando en la casa habitan tres o más personas por habitación; los servicios inadecuados, en las cabeceras municipales, consiste en ausencia de sanitario o servicio de acueducto; la inasistencia escolar se da cuando en el hogar hay por lo menos un niño entre siete y once años que no asiste al colegio; la alta dependencia económica debe cumplir dos condiciones: que hayan tres o más personas por miembro ocupado y que el jefe de hogar tenga aprobaos máximo dos años de educación primaria (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005).

Nivel de ingresos y gastos en el hogar

Se intentó determinar el número de hogares que habitan por vivienda y el tipo de ocupación de la misma. Se determinó el porcentaje de familias que se encuentran por debajo de las líneas de pobreza que fueron establecidas por el DANE para el departamento de Boyacá en el año 2017, para ello se calcula el ingreso *per cápita* (por persona) de cada hogar entrevistado y se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la línea de pobreza es el costo mínimo de una canasta bienes básicos por persona, en 2017, para Boyacá fue de \$227.875, es decir, los hogares que presenten ingresos *per cápita* inferiores a esta cantidad, serán clasificados como pobres; la línea de pobreza extrema es el costo mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas calóricas por persona, en 2017, para Boyacá fue de \$111.738, es decir, los hogares que presenten ingresos *per cápita* inferiores a esta cantidad, serán clasificados como pobres extremos (DANE, 2018).

El promedio total del gasto mensual de las familias entrevistadas en los tres grupos poblacionales encuestados, es de \$482,169 y su estructura se configura de la siguiente manera: los dos gastos más representativos son alimentación y alojamiento con un peso relativo de 51,51% y 40,29% respectivamente; los gastos en comunicaciones, transporte, educación y psicoactivos, superan por poco el 1% de los gastos totales cada uno. Por último, gastos como

artículos para el hogar, restaurantes y hoteles, Recreación, salud y educación no alcanzan cada uno el 1% del total de los gastos.

Competencias laborales y formación para el empleo

Se tuvo en cuenta en primer lugar el nivel de desocupación en los grupos poblacionales así como el grado de informalidad en la ocupación. . La experiencia laboral será entendida como la sumatoria de toda la experiencia adquirida por los individuos en sus diferentes empleos, también se considerará la forma en que la persona adquirió habilidades para el trabajo. Luego se estableció el nivel de escolaridad identificando cuantos niños entre 6 y 18 se encuentran matriculados en primaria y secundaria, y el último grado cursado por cada adulto. Por último, se intentará determinar el interés de la población por ingresar a cursos cortos de capacitación y su disponibilidad de tiempo para este propósito.

Los resultados obtenidos por este trabajo en los barrios de la ciudad, como Luis Carlos Galán II, Cerros de la Alameda y la población dedicada a la actividad de reciclaje en el municipio de Chiquinquirá, permiten establecer tres aspectos respecto a su condición socio-económica:

1. Que la población es susceptible a presentar Necesidades Básicas Insatisfechas en porcentajes considerables. La NBI que se evidenció con mayor frecuencia fue vivienda inadecuada, seguida por hacinamiento crítico. La dependencia económica también merece atención.
2. Que los niveles de pobreza y pobreza extrema, respecto a las líneas establecidas por el DANE para el año 2017 en Boyacá, son bastante notables y merecen atención, pues el ingreso *per cápita* de un grupo importante de los hogares encuestados se ubica por debajo de las líneas de pobreza y pobreza extrema mencionadas.
3. Que la informalidad laboral, la escasa capacitación formal para el trabajo y los bajos niveles de escolaridad identificados, representan complicaciones objetivas para el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos poblacionales estudiados.

Con lo anterior, y teniendo en cuenta todos los datos expuestos en este trabajo, es posible afirmar que la población que se dedica a la actividad de reciclaje en el municipio de Chiquinquirá,

presentan notables condiciones de vulnerabilidad económicas que deben merecer la atención de la sociedad y las instituciones del estado a fin de procurar mejorar la calidad de vida de mencionadas poblaciones.

4. Responsabilidad de los entes territoriales en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Como objetivo y responsabilidad de los entes territoriales en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es la inclusión social de los recicladores de oficio quienes han estado buscando la construcción de sus derechos y su reconocimiento tanto del Estado como de la sociedad como personas que al no poder participar en el mercado laboral optan por desarrollar este trabajo en las calles, recuperando todo material aprovechable que dejan las empresas, los hogares, colegios y el comercio. De acuerdo a lo anterior es pertinente conocer el concepto de inclusión social, según Cadavid (2013), la inclusión social es “un tema económico extenso conlleva a reconocer un sector poblacional que aunque realiza su trabajo de una manera informal, en condiciones de vulnerabilidad, hay que generarle dentro de ellos esa misma dinámica que permita dignificar y hacer reconocer su labor” (p. 54). Así mismo, otra definición de inclusión social es

(...) Es un proceso que garantiza que todas las personas tengan las mismas oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y política de una sociedad y para disfrutar de unas condiciones de vida dignas. La inclusión social se relaciona con la integración, la cohesión y la justicia social. Es la posibilidad de participación igualitaria de todos sus miembros en todas las dimensiones sociales (económica, legal, política, cultural, etc.) (Acción contra el hambre, 2013)

El significativo aporte que la población recicladora hace por evitar el deterioro de nuestro ecosistema y brindar un ambiente sano realizando una labor que a pocas personas les gusta hacer, ya sea porque les parece sucio, porque les parece que no es un trabajo digno, porque no son amigables con el medio ambiente o por las consecuencias que se tiene al realizar esta labor, por ejemplo a ser explotados ya que de los millones de pesos que produce el negocio del

reciclaje al año, ellos reciben solo un mínimo porcentaje; a ser rechazados o discriminados, la sociedad rechaza la basura y extiende dicho rechazo a quienes trabajan con ella además de ser vinculados con la inseguridad en la ciudades los recicladores son considerados personajes de la calle cuya vida está relacionada con robos y delincuencia. Habitualmente no se piensa que su actividad es un trabajo y que este debería darles acceso a derechos básicos como alimentación y vivienda (Asqueta, 2013) o a tener problemas de salud ya que se trabaja expuestos al sol, agua, humedad, residuos peligrosos lo que ocasiona infecciones, irritaciones en la piel al igual que bronquitis asma y neumonía.

(...) Los recicladores cuentan con una labor de más de doce horas en las cuales su condición física se ve afectada y durante las horas de la noche y madrugada utilizan la estructura del carro, como un lugar de resguardo para pasar la noche lo que conlleva a plantear una posible solución a esta necesidad de descanso que les permita pasar la noche en las condiciones adecuadas dentro de su puesto de trabajo. (Fernández, 2019, p. 25).

En las sociedades democráticas el no reconocimiento por las diferencias que puedan manifestar personas, grupos y, en general, los distintos actores de la vida social y el reconocimiento de los derechos se ha convertido en una problemática social. (Garay, 2002, p. 11) Colombia, bajo un ideal de Estado de derecho el cual se ha dejado contagiar por prácticas excluyentes y el aparato jurídico no ha podido imponerse sobre dichas prácticas de la sociedad colombiana los recicladores de oficio han luchado por su dignidad, reconstrucción de derechos e igualdad con el fin de una sana convivencia sociopolítica. “El estado de exclusión social está definido en un individuo como el entrelazamiento de carencias relevantes relativas a la sociedad donde vive. Implica detrimentos en las dimensiones elementales que son el capital humano, capital social, política y laboral”. (Avella, 2009, p. 7)

Mediante resolución 51 del 27 de enero de 2014, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicas (UAESP) establece como acción afirmativa el acuerdo de corresponsabilidad con las organizaciones de recicladores para generar inclusión y condiciones de igualdad para esta población.

El Decreto 596 del 2011 el cual modifica el Decreto 1077 de 2015 el cual reglamenta la actividad de aprovechamiento (reciclaje) y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, en su artículo **2.3.2.5.5.1** indica que los entes territoriales incluirán en el

"programa de inclusión de recicladores" del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) dos proyectos, el primero será un proyecto de capacitación a los recicladores de oficio el cual incluirá asesoramiento para la correcta la prestación del servicio público de aseo y para el manejo de los .residuos aprovechables⁴ y el segundo un proyecto de apoyo a la formalización de los recicladores de oficio⁵.

Y su Artículo **2.3.2.5.5.3**. Establece que: "Las entidades públicas del orden Nacional propenderán por presentar sus residuos aprovechables a las organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento. (Decreto 596, 2016)

Con lo anterior el citado Decreto entrega la responsabilidad a cada Municipio para que adopte políticas públicas a favor de los recicladores de oficio, considerando que la población recicladora ha sido históricamente marginada de los beneficios de la sociedad, la importancia de que cada reciclador sea capacitado es que conocerá los materiales y les dará un trato responsable, al igual que promover campañas educativas dirigidas a los hogares donde sean los mismo recicladores quienes enseñen como se deben separar correctamente las basuras "el reciclaje permite que sean menos los desechos que lleguen al relleno sanitario, reduciendo el uso de agentes contaminantes presentes en la destrucción de materiales en los rellenos, a la vez que se prolonga la vida útil de estos últimos." (Castellanos, 2013, p. 243)

La Política Pública es definida por Parra (2017) como "una herramienta de mitigación de un impacto, que la prevención del mismo; caso preciso de los habitantes de calle, esta sería la manera de desarrollar más una intervención social que, la manera de evitar el suceso de la misma." (p. 6)

Otros autores, como Alzate (2010) la han definido como "una herramienta esencial en el ejercicio académico y práctico de la gestión pública. En la actualidad este tipo de políticas son la

⁴ Un proyecto de capacitación a los recicladores de oficio identificados en el censo de la línea base y en sus actualizaciones posteriores el cual deberá diseñarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos, Formación y asesoramiento para la formalización en alguna de las figuras contempladas en la Ley 142 de 1994 para la prestación del servicio público de aseo; Capacitación en aspectos administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos para la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, de las estructuras organizacionales y de emprendimiento empresarial y Asesoramiento técnico y operativo para el manejo de los residuos aprovechables, generación de valor de los mismos y su incorporación en las cadenas productivas.

⁵ Un proyecto de apoyo a la formalización de los recicladores de oficio el cual deberá considerar los diferentes niveles de vulnerabilidad identificados en el respectivo Censo del PGIRS. Este proyecto deberá incluir metas de formalización las cuales deberán ser evaluadas anualmente.

plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes” (p. 1). O que la política pública debe tener un enfoque para

(...) garantizar como ejes estructurales los siguientes aspectos: acceso cierto y seguro a los materiales reciclables, seguridad en la permanencia de los recicladores en el oficio, apoyos para crecer en la cadena de valor y reconocimiento del pago por servicios de aseo y servicios ambientales, los cuales deben ser garantizados exclusivamente para los recicladores de oficio de acuerdo con las sentencias de amparo obtenidas en los tribunales y haciendo efectiva la aplicación de los autos de la Corte Constitucional de Colombia. (Acosta y Olaya, 2013, p. 10)

Para el logro de las Políticas públicas es necesario el desarrollo de acciones tendientes a restablecer los derechos fundamentales para grupos excluidos. Las acciones afirmativas que adopta cada Municipio, deben permitirles seguir desarrollando su actividad, aprovechando la experiencia y fortaleciendo la capacidad organizativa como empresarios de las basuras. Por acciones afirmativas se entiende

(...) Todo tipo de medidas o políticas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de su grupo sub representado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tenga una mayor representación, con el fin de conseguir una mayor igualdad sustantiva entre grupos sociales con problemas de discriminación o de desigualdad de oportunidades (Díaz, 2005, p. 5).

El Gobierno Nacional y las diferentes alcaldías han generado diversas políticas públicas de inclusión social para que los recicladores tengan una vida digna, la Política Pública es mediar las relaciones entre “Gobernantes” y “Gobernados” y estos últimos en sus conflictos y acuerdos con los diferentes entes que componen el Estado.

Otros ejemplos de inclusión significativas de acciones positivas o afirmativas en el país de grupos o sectores que buscan constituirse como sujetos sociales conscientes de sus derechos y deberes, son

- El empoderamiento de las Mujeres que han proclamado normas que remiten a la protección, ejercicio y goce de los derechos humanos orientados a vivir una vida plena, sin ningún tipo de violencias y de discriminación. (Londoño, 2015, p. 81)
- El movimiento afrodescendiente en Colombia ha conseguido ocupar espacios y situando sus temas a nivel de Estado hace ya tiempo. Además de participar en los procesos constitucionales y de otras leyes para la promoción de la igualdad racial. (Rangel, 2016, p. 22) Por medio de acciones afirmativas han adquirido créditos educativos para estudiantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de escasos recursos económicos⁶.
- La comunidad LGBTI, por medio de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Planeación expone políticas públicas con el propósito de extender acciones que se ejecuten en el Distrito Capital. Además existen entidades que pretenden garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores LGBTI como parte de la inclusión, producción, gestión social y bienestar colectivo de ésta población en la ciudad. (Ramos, Olaya, y Cárdenas., 2017, p. 15)

Ejemplos de inclusión social en el País de esta población nos lo presenta ciudad de Bucaramanga capital del departamento de Santander, quienes brindan reconocimiento como personas y como trabajadores que ayudan a cuidar el medio ambiente; por medio de la alcaldía municipal, de la EMAB (Empresa de aseo de Bucaramanga) y de cooperativas como Coopreser (Cooperativa de Trabajo Asociado de Reciclaje y Servicios) atendiendo el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS y normativas que se han expedido en torno al aprovechamiento de residuos sólidos, han realizado censos de actualización para conocer el estado de la población, con estos censos se busca mejorar las condiciones de vida y trabajo de los

⁶ Este documento fue preparado por Marta Rangel, Consultora de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), bajo la supervisión de Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social, Rodrigo Martínez y Carlos Maldonado, Oficiales de Asuntos Sociales de esa misma División, en el marco del proyecto “Protección social universal” del programa Cambio Estructural para un Desarrollo Sostenible e Inclusivo en América Latina y el Caribe, ejecutado por la CEPAL en conjunto con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.

recicladores y se ha logrado que la administración pública les entregue carnets para facilitar la tarea de recolección de residuos aprovechables en la calle, hogares, conjuntos residenciales y dotaciones para su protección personal e insumos para poder desarrollar su trabajo “Buscamos que la comunidad reconozca la población recicladora y que preste esta actividad de la manera más digna y armónica en el componente social y laboral”, manifestó Henry Andrés Sarmiento Sierra, subsecretario de Ambiente de Bucaramanga. (Alcaldía de Bucaramanga, 2019)

La alcaldía de Bucaramanga y la Universidad de Santander en 1987 se reúnen con el objetivo de reubicar a los recicladores y mejorar sus condiciones, se pensó en la idea de reubicar al grupo reciclador en otra ocupación, pero como la mayoría de personas de este grupo tenían muchos años ejerciendo esta actividad, a través de una opción empresarial se optó por fortalecer su labor, trabajando en equipo con el fin de mejorar sus condiciones económicas, sociales, y personales.

Es así como la idea de cooperativa toma fuerza y se constituye en el año 1987 la Cooperativa de Trabajo Asociado de Reciclaje y Servicios (COOPRESER) una organización sin ánimo de lucro integrada por recicladores de oficio bajo los principios de solidaridad, equidad, justicia, autogestión y regida por las normas Cooperativas.

Otro ejemplo es el de la Ciudad de Medellín capital del Departamento de Antioquia por medio de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín (RECIMED) la cual agremia a los recicladores de oficio de Medellín y del Valle de Aburra con el objetivo de dignificar el trabajo de esta población, contribuyendo a mejorar su vida y la de su familia.

Dicha Cooperativa se formó en el año 2016 a partir del proceso de promoción realizado por el Municipio de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA como una estrategia de fortalecimiento para contrarrestar las dificultades de agremiación y falta de cohesión social, identificadas del Censo de Recicladores de Medellín. (RECIMED)

En el artículo 5 del Estatuto de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín (RECIMED) tiene como objeto mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los recicladores, generando modelos asociativos solidarios y de estructuras empresariales por medio de capacitaciones, educación social y económica.

Dentro de los programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de los recicladores esta

- Banco de Alimentos: Por medio de SACIAR fundación Antioqueña que promueve los comedores sociales para los sectores de marginación, miseria y abandono y en alianza con el Banco Arquidiocesano de Alimentos, con este proyecto aportan al desarrollo de hábitos saludables de alimentación.

- Recimayor: Este proyecto busca proteger al adulto mayor que se encuentra desamparado y no cuentan con una pensión. Por medio de atención psicofamiliar y medica ayudar a esta población.

- Fondo social: Gracias al trabajo solidario dentro de la Cooperativa, cuentan con un fondo social que busca cumplir los sueños de los recicladores para que accedan a becas educativas, accedan a servicios odontológicos, realicen mejoras a sus viviendas y participen de actividades recreativas y culturales.

- La escuela: Con apoyo de entidades aliadas se promueve la educación básica (matemáticas, lectura, escritura, informática) con el fin de eliminar la brecha sociocultural.

El caso que nos ocupa analizar es el de la Ciudad de Chiquinquirá en el que la inclusión de los Recicladores es un programa plasmado dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, donde define a los recicladores como “personas que derivan su sustento de esta actividad y que pudieran trabajar en equipo o en forma individual, utilizando una carretilla u otro vehículo y que comercializan el material recolectado” (PGIRS, 2018) En este programa se encuentran informes de censos realizado hasta el año 2017 se logran identificar 47 personas dedicadas a este oficio y 9 compraventa de material reciclable o unidades productivas, también un esquema que representa el recorrido que realizan los recicladores para la recolección de residuos aprovechables reciclables.

Dichos censos son realizados en cada periodo de gobierno municipal por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas y de Desarrollo Económico y Agropecuario con el fin de cumplir con una acción de visualización e identificación de la población recicladora del Municipio, una vez identificados se presentan a la comunidad como prestadores de servicio de aprovechamiento como una acción de reconocimiento y a través de la Secretaría Desarrollo Económico y Agropecuario brindará asistencia técnica y financiera para mejorar las condiciones de operación de la prestación del servicio de aprovechamiento.

También dentro de la Política Municipal para la inclusión de recicladores decía que inicialmente será apoyado por el Municipio durante un periodo de tres (3) años bajo el concepto de “Aportes bajo condición” de acuerdo al numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 y que además este aporte del municipio para el servicio de aprovechamiento prestado por recicladores puede plantearse como cumplimiento de la función social del Estado y de lo definido por la Honorable Corte Constitucional en sus diferentes pronunciamientos. Dicho lo anterior el modelo de inclusión se debe estructurar dándole un trato a los recicladores como empresarios y favorecer formas asociativas que aseguren la continuidad de la calidad de empresarios de la basura que tienen los recicladores.

Es por ello que en el 2018 se crea una asociación de recicladores legalmente constituida la cual queda por escrito porque al día de hoy no se ha podido cumplir con los estatutos, ni organizar a la población de recicladores, ni que estos reciban los beneficios que decían darles al hacer parte de la asociación como capacitación en temas administrativos, técnicos, tributarios y legales en la prestación del servicio de aprovechamiento.

5. Derechos Humanos a considerar.

Existen normas nacionales e internacionales, disposiciones constitucionales, doctrina y reglas jurisprudenciales que determinan el alcance y contenido de los Derechos Humanos.

La Constitución Política Colombiana de 1991 destaca el respeto de los derechos fundamentales y la inclusión de principios democráticos que fundamentaran el Estado social de derecho sobre el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. (Leiva, Jimenez y Meneses, 2018). Desde el Preámbulo, se enuncia los objetivos de la expedición de la nueva Constitución, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.

Para Osorio (2018) los derechos humanos son “inherentes a la condición humana de cada individuo. Tal es el caso de su universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad e interdependencia, factores que implican que la transgresión de uno solo de ellos traiga como consecuencia la vulneración de otros derechos más” (p. 6). Entre los derechos humanos se encuentran, el derecho al trabajo, a la Igualdad, y la Vida Digna entre otros. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.

El derecho al trabajo es un principio fundante del Estado social de Derecho, la Corte Constitucional ha considerado que cuando el “Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, significo con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva legalidad”. (Sentencia C-593/14 del 20 de agosto). El artículo 25 de la Constitución Política dispone “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” Además de otras protecciones a los trabajadores independientes y dependientes como los artículos 48 y 49 de la Carta establecen los derechos a la seguridad social en pensiones y en salud.

Para salvaguardar el Derecho al trabajo de la población recicladora el Congreso de Colombiana busca por medio de la Ley 1466 de 2011, aplicar los instrumentos legales para proteger desde la fraternidad social y la recuperación ambiental, a los hombres y mujeres que trabajan en la actividad del reciclaje excluyendo el ejercicio arbitrario de la facultad sancionatoria frente a la población vulnerable y garantizando plenamente el derecho al trabajo (Ley 1466 de 2011).

En el caso de Chiquinquirá existen dos tipos de recicladores los informales y ocasionales; los informales se componen de trabajadores que por tradición familiar han realizado este oficio de generación en generación y los ocasionales son personas en estado de desempleo que deben recurrir a realizar labores que carecen de estabilidad económica y derechos laborales para sobrevivir y están al margen de los circuitos formales de la economía. (Leal, 2018)

Otro de los Derechos que preocupa su vulneración es el Derecho a la igualdad, el artículo 13 de la Constitución Política señala como una obligación del Estado la de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Una de las sentencias que protege el derecho a la igualdad es la sentencia T- 724/03 la cual como se ha mencionado anteriormente expone el caso de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), la cual demanda judicialmente a la empresa prestadora del servicio de aseo en Bogotá, entidad pública a cargo de la licitación, por violación de sus derechos a la igualdad y a la participación. La Corte Constitucional falló a favor de los recicladores en la tutela T 724 de 2003, ordenando a la administración repetir la licitación y modificar la normativa del servicio de aseo, a fin de generar espacios de participación que

eliminaran o disminuyeran las situaciones de desventaja material de los recicladores en su calidad de población vulnerable. Además dicha sentencia señala que el derecho a la igualdad es uno de los derechos vulnerados en la población recicladora “De manera que las autoridades del Estado están obligadas, cuando se encuentran en presencia de grupos en condiciones de marginalidad y discriminación, a adoptar medidas para lograr una mayor igualdad sustantiva, incluyendo en sus decisiones tratamientos acordes con tales situaciones” (Sentencia T-724, 2003).

Hoy, después de 15 años de este logro jurídico, en el Municipio de Chiquinquirá no es posible evidenciar que las disposiciones normativas hayan logrado una igualdad real, como los podemos observar en las demandas posteriores por desacato a la Tutela de 2003 y las manifestaciones públicas de los recicladores sobre la continuidad de su situación de exclusión.

Al igual que el Derecho al Trabajo y a la Igualdad, también es principio fundante de la Constitución La Dignidad Humana, este derecho no es para que la persona la adquiera ni que el estado se la otorgue sino para que se re reconozca y respete, la dignidad es un atributo esencial del ser humano. La Corte ha determinado que la dignidad humana equivale:

(...) (i) al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Por tanto, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado. (Sentencia T-291, 2016).

La Sala también ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos

- (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera).
- (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien).
- (iii) La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).

Es importante aclarar que las normas y principios constitucionales no son solo aquellos que aparecen expresamente en la Constitución Política Colombiana, sino también las que la misma Constitución remite y que integran el Bloque de Constitucionalidad, en estas normas se destacan los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. (Velasco y Llano, 2017, p. 6) La noción de Bloque de Constitucionalidad ha servido de fundamento normativo para tomar determinaciones importantes, a partir de 1995 se empezó a utilizar este término en la jurisprudencia Colombiana.

En ordenamientos como el de Colombia que establece la supremacía constitucional la figura de Bloque de Constitucionalidad amplia resolver cualquier controversia ya que además de tener en cuenta las normas constitucionales el juez tiene a su disposición otros principios de la misma relevancia para resolver el conflicto. Es por eso que Colombia ha venido ratificando varios convenios internacionales que sirven como regla de interpretación respecto a dudas o integrar la normatividad cuando no exista una norma directamente aplicable al caso para fortalecer el aparato jurídico.

Dentro de estos convenios podemos mencionar el de la Organización Internacional del trabajo (OIT), quien define el empleo de los recicladores como informal. Es decir, los asalariados que no gozan de protección o están cubiertos por la seguridad social como asalariados, o que no tienen derecho a otros beneficios del empleo como vacaciones anuales pagadas o licencia por enfermedad. Además, de no contar con identificación, con una remuneración inconstante, y con una limitada capacidad organizativa.

Para Colombia, a partir de recomendaciones y prácticas internacionales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha definido el empleo informal como

(...) un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. En consecuencia, el empleo informal se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de esos hogares. (DANE, 2009)

Otro convenio que protege el derecho a trabajar en unas condiciones justas, favorables, dignas y que exista igualdad sin discriminación es el Pacto de San José o también conocida como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de la cual Colombia hace parte conforme a la Ley 16 del 1972.⁷

Además de los convenios anteriores Colombia cuenta con el Pacto de Derechos económicos, sociales y culturales el cual busca promover y proteger el derecho al trabajo; el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico (Almario, 2016) y el pacto de Derechos civiles y políticos el cual protege derechos como igualdad ante la ley; la libertad de asociación; la participación en asuntos públicos y elecciones; y la protección de los derechos de las minorías (Blanco, 2009).

Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados conseguidos en el estudio de la situación socio-económica, empresarial y competitiva de las poblaciones más vulnerables del municipio de Chiquinquirá permiten evidenciar tres aspectos respecto a su condición socio-económica:

1. Que la población es susceptible a presentar Necesidades Básicas Insatisfechas en porcentajes considerables. La NBI que se evidenció con mayor frecuencia fue vivienda inadecuada, seguida por hacinamiento crítico. La dependencia económica también merece atención.
2. Que los niveles de pobreza y pobreza extrema, respecto a las líneas establecidas por el DANE para el año 2017 en Boyacá, son bastante notables y merecen atención, pues el ingreso *per cápita* de un grupo importante de los hogares encuestados se ubica por debajo de las líneas de pobreza y pobreza extrema mencionadas.

⁷ Ley 16 de 1972 Congreso de Colombia. por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" *firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969*

3. Que la informalidad laboral, la escasa capacitación formal para el trabajo y los bajos niveles de escolaridad identificados, representan complicaciones objetivas para el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos poblacionales estudiados.
4. Teniendo en cuenta todos los datos expuestos en este trabajo, es posible afirmar que la población que se dedica a la actividad de reciclaje en el municipio de Chiquinquirá, presentan notables condiciones de vulnerabilidad económicas que deben merecer la atención de la sociedad y las instituciones del estado a fin de procurar mejorar la calidad de vida de mencionadas poblaciones.
5. También se puede concluir que Bucaramanga y Medellín son dos ejemplos de inclusión social en Colombia de una población que “se caracterizan por ser ciudadanos que por muchos años han ejercido su trabajo sin ningún reconocimiento social; trabajan en el sector informal del país, siendo el primer peldaño de la escala social de la cadena de reciclaje” (Cañon, 2013), brindándoles una mejor condición de vida tanto al reciclador como su núcleo familiar, oportunidades laborales, acceso a Educación, Salud y su inclusión en los programas sociales de la Alcaldía. Además, de contribuir a que todas las personas gocen de un ambiente sano, de acuerdo al artículo 79 de Constitución Política se debe conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
6. Chiquinquirá aunque dentro de sus programas este escrito la inclusión de este grupo como acciones afirmativas para garantizarles acceso al trabajo, a una vida digna y a una igualdad social en cumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de la Corte Constitucional y a la función social que debe garantizar el estado dichas acciones afirmativas han faltado desarrollarlas ya que solo se ha cumplido con actualizar el censo de recicladores en este periodo municipal y lograr su reconocimiento como prestadores del servicio de aprovechamiento.

No se ha cumplido con las capacitaciones en temas administrativos, técnicos, tributarios y legales en la prestación del servicio de aprovechamiento como acciones afirmativas que quedo de adelantar el Municipio como acción afirmativa ni la destinación de recursos para el fortalecimiento de la labor de los recicladores en el municipio. Es por ello que las Políticas Publicas no han sido suficientes para garantizar la inclusión de los recicladores en la prestación

del servicio público de aseo además de que siendo este un Estado Social del Derecho se sobrepase la barrera discriminatoria a la población recicladora.

Las recomendaciones para la actual y siguiente administración del Municipio de Chiquinquirá frente a los recicladores son:

1. Que las actividades y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) atiendan las verdaderas necesidades de inclusión de los recicladores y su vinculación al servicio público de aseo puesto que el objetivo de la formalización de los recicladores de Chiquinquirá es mejorar su actividad y en lo posible lograr mejores ingresos.
2. Una necesidad importante, para la inclusión de la población recicladora es la educación, preparación y capacitación en temas laborales, de salud ocupacional o empresarial los cuales se podrían gestionar a través de entidades como el SENA.
3. También me parece importante que la administración incluya en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) programas de apoyo a la infancia, los cuales incluyen los Centros de desarrollo infantil en donde los recicladores podrán inscribir sus niños y dejarlos en este centro para evitar llevarlos a las calles.

Referencias bibliográficas

Acción contra el hambre. (2013). Obtenido de “Conceptos: Pobreza, Exclusión Social, Vulnerabilidad e Inclusión Social”.

Acosta, A y Olaya, A. (2013). Recicladoras y recicladores de Bogotá, Colombia . *Globalizando y Organizando (WIEGO)*. Obtenido de <http://www.wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/IEMS-Bogota-Waste-Pickers-City-Report-Espanol.pdf>

Alcaldía de Bucaramanga. (2019). *Alcaldía de Bucaramanga entregó elementos de dotación personal a tres cooperativas de recicladores*. Obtenido de Subsecretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga: <https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/43218-2/>

Almario Pantoja, M. (2016). Estabilidad y garantías de los derechos laborales de los funcionarios y empleados del sector judicial en Colombia. *Novum Jus: Revista Especializada En Sociología Jurídica Y Política*, 10(1), 93-112. Obtenido de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1177/1164

- Alzate, S. (2010). Las políticas públicas en Colombia. Insuficiencias y desafíos. *Revista departamento de ciencia política*. Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Obtenido de: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/32359/32374>
- Asqueta, M. (2013). Basura y reciclaje. Sobrevivir con los residuos ajenos. *Discurso & Sociedad*, 7(4), 643-663. Obtenido de: [http://www.dissoc.org/ediciones/v07n04/DS7\(4\)Asqueta.pdf](http://www.dissoc.org/ediciones/v07n04/DS7(4)Asqueta.pdf)
- Avella, A. (2009). *EXCLUSIÓN SOCIAL Y SEGMENTACIÓN LABORAL EN COLOMBIA*. (tesis de doctorado). Universidad Nacional de Colombia. Obtenido de: http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/Doctorado/Tesis/Tesis_Aura_Pedraz_a.pdf
- Blanco Blanco, J. (2009). Los derechos civiles y políticos en la historia constitucional colombiana. *Novum Jus: Revista Especializada En Sociología Jurídica Y Política*, 3(1), 133-160. Recuperado de: https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/883/910
- Cano, M. (2017). Los recicladores y su derecho a participar –eficacia del marco normativo generado para su protección. *Verbum*. Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, Colombia. Obtenido de: <https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/verbum/article/download/958/804/>
- Cañón Cadavid, A. M. (2013). *Los recicladores de tu zona, una propuesta publicitaria que genera inclusión social*. (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Obtenido de: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/14627>

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (2013). *Caso Emblemático - OPCH - Relleno sanitario en Chiquinquirá, vereda Carapacho*. Obtenido de: <http://oaica.car.gov.co/vercaso.php?id=6>

Castellanos, X. (2013). Pobreza y jurisprudencia constitucional colombiana: El caso de los Recicladores. *Sociedad y equidad*. (5), 238-258. Obtenido de: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-PobrezaYJurisprudenciaConstitucionalColombianaElCa-4518670.pdf>

DANE. (2005). *Boletín, Censo General 2005. Necesidades Básicas Insatisfechas*.

DANE. (2009). *Metodología Informalidad Gran Encuesta Integrada de Hogares- Geih, Dirección de Metodología y Producción Estadística, Dimpe, Dane, Bogotá*.

DANE. (2018). *Boletín técnico. pobreza monetaria, Boyacá 2017*.

Díaz, M. (2005). *La organización comunitaria entorno al reciclaje*. (tesis de maestría). Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Obtenido de: <https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/9190>

Fernández, S. (2019). *Reciclando ando*. (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Obtenido de: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/4282>

Figueroa Vargas, D. y García García L. (2019). Comprensión de las acciones comunitarias en educación ambiental en Chiquinquirá, Boyacá. *Praxis & Saber*. (10), 1-22. Obtenido de: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/9735/8117

- Fraser, S. (2010). Inclusion Social. *Documentos de investigación. Economía*. (7), 5-48. Obtenido de: <https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/2010-12-documentos-investigacion-economia-007.pdf>
- Garay, L. (2002). En torno a la economíapolítica de la exclusión social en colombia. *Revista de economía institucional*, 5 (8), 15-31. Obtenido de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/203/188>
- Lavalleja, M. y Rosselot, S. (2018). Crecimiento, pobreza y distribución del ingreso en el Uruguay (2006-2016). *Serie estudios y perspectivas*. (35), 7-23. Obtenido de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44240/1/S1800918_es.pdf
- Leal, R. C. (2018). *Libre Competencia y Reciclaje en Bogota: Informalidad y Explotacion en el Servicio Publico de Aprovechamiento de Residuos Solidos.(trabajo de maestría)*.Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá.
- Londoño, R. (2015). *La participación de la mujer en la política colombiana entre las acciones afirmativas y la ley 1475 de 2011*. (tesis de maestría).Universidad Católica de Colombia. Bogotá. Obtenido de: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/6160/1/TESIS-RUTH%20TRINIDAD%20LORA%20LONDO%C3%91O.pdf>
- López, N., Páez, M. y Roncancio, A. (2018). *Estudio de factibilidad para la creación de una planta de producción de abono orgánico usando larvas de escarabajos para la transformación de los residuos orgánicos generados en el Centro de Acopio de la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá*.(tesis de pregrado).Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Chiquinquirá, Boyacá. Obtenido de: <http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2595>

Maldonado Castañeda, H. (2018). *Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad Bajo la Norma ISO 9001 de 2015 para la Asociación de Reciclaje "Mym Universal S.A.S"*. (tesis de pregrado). Universidad Católica de Colombia. Bogotá. Obtenido de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/16141>

Martínez, A. (2017). Garantía de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el multinacionalismo y el neoconstitucionalismo. Obtenido de Novum Jus: *Revista Especializada En Sociología Jurídica Y Política*, 11(2), 19-51.: doi:<http://dx.doi.org/10.14718/NovumJus.2017.11.2.2>

Osorio Ospitia, O. P. (2018). *La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de reparación víctimas*. (tesis de pregrado). Universidad Católica de Colombia. Bogotá. Obtenido de: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16218/1/La%20Corte%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20y%20los%20mecanismos%20de%20reparaci%C3%B3n%20de%20v%C3%ADctimas%20%281%29.pdf>

Parra Gantiva, H. (2017). Política pública de habitantes de calle en Bogotá: avances y necesidades de mejora hacia el reconocimiento de derechos fundamentales y dignificación humana de personas habitantes de calle. (tesis de pregrado). Universidad Católica de Colombia. Bogotá. Obtenido de: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14924/1/Art%c3%adculo.%20Pol%c3%adtica%20p%c3%bablica%20de%20habitantes%20de%20calle%20en%20Bogot%c3%a1%2c%20avances%20y%20necesidades%20de%20mejora%20haci.pdf>

PGIRS, A. (2018). ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. *Alcaldía de Chiquinquirá, Centro Administrativo Municipal*.

Quintana, E; Guillermo, W y Meneses, O. (2018). Los derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991 como resultado de un proceso constituyente deliberativo. *Revista Derecho del Estado*. (42) 149-180. DOI:

<https://doi.org/10.18601/01229893.n42.06>

Obtenido

de:

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/5667/7385>

Ramos, L., Olaya, T., y Cárdenas., L. (2017). *Inclusion Laboral en poblacion LGBTI en Bogota*. (tesis de pregrado). Universidad Catolica de Colombia. Bogotá. Obtenido de:

<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15131/1/LUCAS%20CARDENAS%20C%20Tatiana%20Olaya%20%26%20Luisa%20F%20Ramos%20NOV%2014%20DEF.pdf>

Rangel, M. (2016). Políticas públicas para afrodescendientes. *Series políticas sociales*. (220), 7-51. Obtenido de:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40854/1/S1601272_es.pdf

RECIMED. (s.f.). *Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellin*.

Rodríguez, L. y Vergara, R. (2015). Condiciones sociales y culturales de los recicladores en Colombia. *Revista de Estudiantes de Administración de Empresas*. Universidad Nacional de Colombia. Obtenido de:

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayos/article/view/56323/55341>

Velasco Cano, N., & Llano, J. (2017). Derechos fundamentales: un debate desde la argumentación jurídica, el garantismo y el comunitarismo. *Novum Jus: Revista Especializada En Sociología Jurídica Y Política*, 10(2), 35-55. Recuperado de: https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1317/1250

Jurisprudencia

Sala Plena de la Corte Constitucional (20 de Agosto de 2014). Sentencia C-593/14, S. [MP Jorge Pretelt]

Sala Plena de la Corte Constitucional (4 de Noviembre de 2019). Sentencia C-793/09, S. [MP Gabriel Mendoza]

Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional (23 de Abril de 2009). Tutela T-291/09, S. [MP Clara Reales]

Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional (13 de Agosto de 1992) Sentencia T-491/92, S. N. [MP Eduardo Cifuentes]

Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional (20 de Agosto de 2003) Sentencia T-724/03, S. d. [MP Jaime Araujo]

Normativa

Benedetti, A. y Otero, E. y Zuluaga, C. (s.f.). Ley 1466 de 2011. Bogotá: Congreso de Colombia.

Henao, L. y Gaviria, S. (2016). Decreto 596. *Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio* Bogotá: Presidencia de la Republica de Colombia.

Pastrana, A. (1999). Ley 511 de 1999 . Bogotá: Congreso de Colombia.

